

PROCEDIMIENTO: Aplicación General.

MATERIA: Declaración de relación laboral; despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales.

DEMANDANTE: Pedro Carcey Mena

DEMANDADO: Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

RUC: 23-4-0466419-0

RIT: O-227-2023

San Miguel, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que ante este Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, se llevó a efecto audiencia de juicio oral en los autos **R.I.T.O-227-2023, RUC N°23-4-0466419-0** por reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones, solicitado en procedimiento de aplicación general.

La demanda fue entablada por don **PEDRO CARCEY MENA**, preparador físico, domiciliado en Avenida Padre Hurtado N° 11014, comuna de El Bosque, quien lo hizo asistido por el abogado don Juan González Barahona.

La demandada **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA**, representada legalmente por su Alcalde don Luis Astudillo Peiretti, ambos domiciliados en Avenida Presidente Salvador Allende Gossen N° 2029, comuna de Pedro Aguirre Cerda, compareció asistida por la abogada doña Myriam González Jaque.

OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don **PEDRO CARCEY MENA**, interpuso demanda—en procedimiento de aplicación general- en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA** con el objeto que se declarase que el vínculo que había mantenido con la demandada era de naturaleza laboral, que su despido era nulo e injustificado, por lo que resultaba procedente condenar a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones y prestaciones, todas las cuales reclama debidamente reajustes con intereses y las costas de la causa; a saber:



- 1.- \$ **900.000** por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo;
- 2.- \$ **3.600.000** por concepto de indemnización por años de servicio;
- 3.- \$ **1.800.000** por concepto de recargo legal correspondiente al 50%;
- 4.- \$ **2.448.900** por concepto de feriado legal y proporcional;
- 5.- Cotizaciones de seguridad social correspondientes al periodo en que estuvo vigente la relación laboral.
- 6.- Remuneraciones y demás prestaciones derivadas de lo establecido en el artículo 162 del Código del Trabajo.

Funda su demanda indicando que con fecha 01 de marzo de 2019 comenzó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia de la demandada mediante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios a honorarios los que en definitiva encubrían un contrato de trabajo. Sostiene que fue contratado para prestar servicios de preparador físico/ deporte adaptado, en el programa denominado “ Inclusión y participación para personas en situación de discapacidad el que luego pasó a ser “ Apoyo a la discapacidad e inclusión”, programa que dependía de la Dideco de la Municipalidad demandada. Indica que sus funciones estaban contenidas en sus contratos no obstante lo cual cumplía otras funciones que no estaban contempladas en aquellos pero que le eran asignadas por sus superiores. Junto con lo anterior, indica que a varios funcionarios de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda se les encomendó repartir cajas de mercadería para la comunidad lo que se extendió durante el tiempo de la pandemia. Refiere que sus servicios fueron prestados en una jornada de trabajo de 33 horas semanales, no obstante lo cual en septiembre de 2019 sus horas fueron aumentadas a 44 horas semanales para luego cumplir 45 horas semanales, jornada de trabajo que era distribuida de lunes a viernes en los horarios que se le indicaba. En cuanto al lugar de prestación de los servicios, sostiene que los mismos fueron ejecutados en dependencias del edificio Consistorial como también en el Estadio Municipal, en el Gimnasio Villa Sur y en la Escuela Poetas de Chile y en ocasiones fuera de la comuna cuando debían concurrir a torneos intercomunales. Indica que con motivo de sus servicios percibía una remuneración ascendente a la suma de \$900.000, cantidad que pide



sea determinada para los efectos de lo establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo. Referido al término de sus servicios, sostiene que con fecha 01 de diciembre de 2022 se le notificó por escrito la no renovación de su contrato a honorarios, el que se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 sin cumplir a su respecto con ninguna de las formalidades legales establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo. Por todo lo anterior y encontrándose adeudadas las cotizaciones de seguridad social, es que pide se acoja la presente demanda en todas sus partes con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que la demandada **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGURRE CERDA**, contestando la demanda intentada en su contra, solicita el rechazo de la misma en todas sus partes con expresa condena en costas. Funda su alegación sosteniendo que el actor no prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencias sino que el mismo prestó sus servicios en calidad de funcionario a honorarios en distintos programas de carácter municipal para desarrollar labores transitorias y específicas especialmente determinadas por las directrices que dichos programas establecían. Refiere que por esos servicios percibía un estipendio que estaba acordado entre marzo a diciembre de cada año. Sostiene que los programas dependen de la Dideco y tienen por objetivo prestar atención preferencial a personas con situación de discapacidad permanente así como el acceso oportuno a la entrega de ayudas técnicas de baja complejidad que se adquiere con presupuesto municipal además de efectuar orientación para que las personas en dichas condiciones pudieren acceder a la oferta pública de protección social destinada a dichas personas. Indica que el actor nunca reclamó de su vínculo y que en todo caso el mismo no se acordó conforme lo establecía el artículo 7° del Código del Trabajo. Refiere que las labores del demandante fueron especialmente transitorias, temporales, todas las cuales estaban en la propia descripción del cargo contenido en los contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos con aquel, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 18.883. Sostiene que el actor nunca reclamó de su vínculo por lo que su demanda solo está motivada porque el Municipio ya no requiere sus servicios. Por lo anterior, y teniendo presente lo establecido en las normas que



invoca, solicita que la demanda sea rechazada en todas sus partes con expresa condena en costas.

TERCERO: Que se procedió a llamar a las partes a conciliación la que no fructificó atendida la postura manifestada por aquellas.

CUARTO: Que acto seguido, se procedió a determinar los siguientes hechos a discutir:

1. Efectividad de que el actor haya prestado servicios bajo vínculo de subordinación de la demandada Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda de conformidad a lo establecido en el artículo 7° del Código del Trabajo. En la afirmativa, fecha de inicio y estipulaciones de dicho vínculo contractual.
2. En su caso, vínculo existente entre la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y el actor, de existir éste, fecha de inicio, estipulaciones acordadas y estatuto jurídico conforme al cual se acordó la prestación de los servicios.
3. En su caso, remuneración pactada y efectivamente percibida por el actor con ocasión de la prestación de sus servicios. De ser esta variable, el promedio de los tres últimos meses con indicación en ambos casos de los ítems que componen la remuneración.
4. En su caso, formalidades adoptadas por la demandada para efectos de poner término a los servicios del actor. De existir carta de término de los servicios, fecha de ésta, tenor de la misma y oportunidad en la cual comunicada al actor y al organismo administrativo respectivo.
5. En su caso, fecha y causal de término de los servicios. Hechos, pormenores y circunstancias que hubieren sido esgrimidas por la demandada para efecto de poner término a los servicios del actor y procedencia de los mismos.
6. En su caso, estado de pago de las cotizaciones de seguridad social del actor a la fecha de término de los servicios. Pormenores y circunstancias de lo anterior.
7. En su caso, prestaciones adeudadas al actor a la fecha de término de los servicios.

QUINTO: Que en orden a acreditar sus alegaciones, las partes incorporaron y rindieron las siguientes pruebas:

Demandante:



a) Documental, consistente en:

1. Copia de contrato entre don Pedro Esteban Carcey Mena y la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de fecha 04 de octubre de 2019.
2. Copia de contrato entre don Pedro Esteban Carcey Mena y la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de fecha 09 de abril de 2020.
3. Copia de contrato entre don Pedro Esteban Carcey Mena y la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de fecha 22 de febrero de 2021.
4. Copia de contrato entre don Pedro Esteban Carcey Mena y la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de fecha 24 de febrero de 2022.
5. Copia Decreto N° 3409 de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de fecha 13 de marzo de 2019, que autoriza la contratación de don Pedro Esteban Carcey Mena.
6. Copia Decreto N° 1463 de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de fecha 22 de enero de 2020, que autoriza la contratación de don Pedro Esteban Carcey Mena.
7. Copia Decreto N° 2093 de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de fecha 11 de febrero de 2021, que autoriza la contratación de don Pedro Esteban Carcey Mena.
8. Copia Decreto N° 2801 de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de fecha 18 de febrero de 2022, que autoriza la contratación de don Pedro Esteban Carcey Mena.
9. Certificado laboral de fecha diciembre de 2022 emitido por la I. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, a nombre de don Pedro Esteban Carcey Mena.
10. Copia de Decreto N° 6165, de la I. Municipalidad Pedro Aguirre Cerda, de fecha 17 de julio de 2020, sobre campaña “Alimentos para Chile”.
11. Copia acta de notificación de no renovación de contrato, de fecha 01 de



diciembre de 2022.

12. Set de 9 correos electrónicos enviados y recibidos por el actor en el desempeño de sus funciones, por el periodo enero de 2021 a noviembre de 2022.

13. Fotografía de credencial que debía utilizar el actor en el desempeño de sus funciones.

b) Confesional, en cuya virtud absolvió posiciones don Luis Alberto Astudillo Peiretti, en representación de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, quien no compareció a la audiencia respectiva por lo que se tendrá presente a su respecto lo establecido en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo, según se razone en esta sentencia.

c) Testimonial, consistente en la declaración de don Bastían Rodríguez González, C.I. 19.846.032-K, quien legalmente interrogado, señaló en síntesis que conoce al actor desde el año 2019 en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. Sostiene que en su caso laboró desde el año 2016 y él entró en el año 2019. En cuanto a sus funciones, dice que el demandante era monitor deportivo en el departamento de discapacidad siendo desvinculado el año 2022. Respecto del lugar donde lo conoció, sostiene que esto ocurrió en el departamento de deportes y luego se fue a cultura y ayudó también en el reparto de alimentos con ocasión de la emergencia sanitaria. Respecto del lugar, dice que laboró en el edificio consistorial ubicado en calle Salesianos y que las funciones del demandante eran permanentes y continuas siendo sus jefes 2 personas. En cuanto a su jornada de trabajo, refiere que tenía una jornada de trabajo de 45 horas semanales y que le eran concedidos permisos administrativos, feriado, etc pero no sabe si registró asistencia; agrega que también laboraba en terreno. En cuanto a las labores ejecutadas, dice que también debió cumplir las mismas en pandemia y que prestó ayuda. Reconoce que el demandante prestaba servicios en el programa de discapacidad el que dependía de la Dideco siendo el mismo un programa interno.

d) Otros medios de prueba, consistentes en la exhibición de los siguientes documentos, todos los cuales no lo fueron razón por la cual se tendrá presente a



su respecto lo establecido en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo según se razone al momento de la dictación de la presente sentencia; a saber:

1. Libro o registro de asistencia que mantenga respecto del actor en el período comprendido entre el 01 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2022. (no exhibe, señala que no existe)
2. Decretos de pagos efectuados por la demandada al actor, en el período comprendido entre el 01 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2022. (no exhibe).

Junto con lo anterior, la parte solicitó oficios a AFC Chile (Folio 59); Fonasa (Folio 56); AFP PlanVital (informe Previred Folio 49), cuyas respuestas fueron incorporadas en los folios antes indicados.

Demandado:

a) Documental, consistente en:

1. Informe de actividades Programa Integración, Inclusión para personas en situación de discapacidad 2019 meses marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
2. Boletas de honorarios marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todos del año 2019.
3. Decreto N°3409 de 13-03-2019.
4. Decreto N°14280 de 04-10-2019.
5. Contrato de prestación de servicios a honorarios 04-10-2019.
6. Decreto N°1463 de 22-01-2020.
7. Informes de actividades Programa Inclusión y participación para personas en situación de discapacidad meses enero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre de 2020.
8. Boletas de honorarios enero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre 2020.
9. Contrato prestación de servicios a honorarios 29-01-2020.
10. Decreto N°4013 de 07-04-2020.



11. Contrato prestación de servicios a honorarios 09-04-2020.
12. Formulario Presentación Programa año 2020 Inclusión y participación para personas en situación de discapacidad año 2020.
13. Ficha de evaluación programa año 2020 primer semestre.
14. Decreto N°436 de 14-01-2021.
15. Decreto N°2093 de 11-02-2021.
16. Informe de actividades Programa Inclusión y participación para personas en situación de discapacidad año 2020 meses mayo, junio, octubre de 2020.
17. Boletas de honorarios meses mayo, junio, octubre de 2020.
18. Informes de actividades Programa Discapacidad e Inclusión 2021 de enero, febrero marzo, abril, mayo, junio , julio, agosto, agosto, octubre, noviembre , diciembre 2021
19. Boletas de honorarios2021, enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, agosto, octubre, noviembre, diciembre 2021.
20. Contrato prestación a honorarios 22-02-2021.
21. Decreto N°12018 de 04-11-2021.
22. Formulario presentación Programa Discapacidad e Inclusión año 2021.
23. Informes de actividades Programa “Apoyo a la discapacidad e Inclusión año 2022”enero febrero, marzo, abril , mayo, julio, agosto , octubre , noviembre , diciembre de 2022.
24. Boletas de honorarios meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre de 2022.
25. Decreto N°2801 de 18-02-2022.
26. Contrato prestación de servicios a Honorarios 24-02-2022.
27. Formulario Presentación Programa Apoyo discapacidad e Inclusión año 2022.
28. Carta de notificación de fecha 05-12-2022 de Secretario Municipal.
29. Acta de notificación de No Renovación de 01-12-2022.
30. Guía de Admisión SISVE N°826741538.
31. Guía de entrega de Correos de Chile de 05-12-2022

b) Testimonial, consistente en la declaración de los siguientes testigos quienes señalaron lo que consta en el registro de audio de este tribunal; a saber:



1. Claudio Ibáñez González, C.I. 8.821.936-8, quien en síntesis indicó que fue Director de la Dideco entre los años 2021-2022 y que en tal calidad conoció al actor quien prestó sus servicios en el programa de discapacidad. Refiere que aquel era un trabajador a honorarios específicamente en el programa de inclusión, participación, deportes, programa que es de financiamiento municipal. En cuanto a las labores, dice que el actor desarrollaba labores de apoyo a la gestión y apoyo al preparador físico. En cuanto al periodo en que ya no prestó más servicios, dice que aquello ocurrió a partir del mes de enero de 2023 y conoce que hubo evaluación del programa por parte del Concejo Municipal; agrega que durante el año 2020 el programa fue adaptado siendo el financiamiento derivado a reorientación para personas con discapacidad. Niega que exista una persona que lo haya reemplazado en las labores pues el programa derivó a ayuda técnica y a salud. Refiere que durante la pandemia efectuó labores de apoyo a la gestión municipal y que de acuerdo a su contrato, efectuaba una prestación de servicios a honorarios y que las funciones del actor variaban.

2. Rubí Gutiérrez Kawres, C.I. 13.094.970-3, quien en síntesis indicó que es el encargado del programa de discapacidad en el año 2022, instancia laboral en que conoció al demandante quien efectuaba labores de acompañante, orientador, de traslado a aquellas personas con discapacidad, labores que realizó en dos dependencias municipales. Agrega que el actor no registraba asistencia y emitía boletas de honorarios. En cuanto a su función, dice que ella debía velar por el cumplimiento de los objetivos del programa. En cuanto al periodo de prestación de servicios del demandante, sostiene que aquello ocurrió a partir del 30 de noviembre de 2022. Refiere a que como el objetivo del programa cambió, ya no fue necesario contratar a otra persona. En cuanto a las instrucciones, dice que las mismas estaban definidas en los contratos y que era el actor quien acordaba con el usuario donde se iba a desempeñar. Niega que haya atendido público.

SEXTO: Que valorada la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, con respeto a los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados, este Tribunal, llega a las siguientes



conclusiones:

1.- Que tal y como consta del Decreto N° 3409, de 13 de marzo de 2019, ha de tenerse por establecido que la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda fue contratado en calidad de profesional de apoyo, servicios que prestó en un programa municipal denominado “Integración e Inclusión para personas en situación de discapacidad 2019. Que dicho programa, según se desprende del acto administrativo ya indicado dependía de la Dideco respectiva quien era la encargada de certificar el cumplimiento de los servicios encomendados ya que los estipendios involucrados debían ser imputados al ítem referido a prestaciones de servicios comunitarios. Que tal y como consta de dicho decreto, el demandante percibió un estipendio mensual ascendente a \$ 500.000, suma bruta a la que debieron efectuarse los descuentos impositivos respectivos. Dichos servicios fueron acordados para ser prestados entre el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2019, tal y como se desprende del decreto ya mencionado.

Que si bien esos servicios fueron acordados para ser prestados en una jornada de trabajo de 33 horas semanales, aquella jornada de trabajo fue aumentada a 44 horas semanales tal y como se desprende del Decreto N° 14.280, de fecha 04 de octubre de 2019 por lo que sus honorarios aumentaron a \$700.000 brutos.

Que de acuerdo al contrato de prestación de servicios de 04 de octubre de 2019, suscrito previa autorización de contratación del actor de acuerdo a los decretos municipales, dispuso que el antes referido debía prestar labores de planificación e implementación de un taller de bochas dirigido a personas con discapacidad; planificar y ejecutar labores de entrenamiento para usuarios de un taller de tenis; planificar, gestionar y ejecutar torneos comunales e intercomunales referidos a ciertos deportes, apoyar en la entrega de ayuda técnica del programa de integración e inclusión para personas en situación de discapacidad 2019, y en general efectuar labores de planificación, elaboración, difusión, gestión de traslado fomento de la participación de personas con necesidades especiales, además de participar en diferentes actividades de DIDECO.



Que de acuerdo a dicho contrato de prestación de servicios, la DIDECO respectiva era la encargada de velar por el cumplimiento de las labores encomendadas para lo cual debía elaborar un informe mensual de desempeño del actor, informe que era necesario para autorizar el pago de los estipendios a que tenía derecho el demandante con motivo de la prestación de sus servicios.

2.- Cumplido el plazo del contrato de prestación de servicios analizado de manera precedente, el demandante nuevamente fue contratado durante los años 2020, 2021 y 2022, para prestar labores de profesional de apoyo en el Programa denominado “ Discapacidad e Inclusión” servicios que fueron acordados para desempeñarse entre el 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre de igual año; entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 y entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, todo conforme se desprende de los decretos municipales que aprobaron su contratación.

3.- Que de acuerdo a dichos actos administrativos, todos los cuales fueron hechos valer en este proceso por la demandada, el actor debió prestar sus servicios percibiendo por los mismos un estipendio que al año 2020 ascendió a la suma bruta de \$900.000, cantidad bruta que le era pagada al actor previo emisión de un informe de actividades al que debía adjuntarse un informe de actividades previamente revisado y autorizado por el Director de la DIDECO respectiva. Que de acuerdo a lo que se desprende del contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 24 de febrero de 2022, el demandante a partir de dicho año fue contratado para prestar servicios de apoyo deporte adaptado en el marco del programa “Apoyo a la discapacidad e inclusión”.

4.- Que de acuerdo al formulario de presentación de proyectos y programas municipales correspondientes a los años en que el actor prestó servicios a honorarios, PLADECO de la Municipalidad demandada ponía a disposición del Consejo Municipal una serie de proyectos y programas de carácter anual para ser desarrollados por diversas direcciones municipales, dentro de los cuales estaban considerados los programas en los que era contratado el actor. Que tal y como se lee de esos formularios, los proyectos estaba destinados a ser ejecutados por un



periodo de tiempo, específicamente, un año. Que de acuerdo a lo que se lee de aquellos formularios y conforme a lo señalado por los testigos del demandante ha de indicarse que el Concejo Municipal previa formulación de los proyectos y programas municipales, decidía anualmente si autorizaba o no la ejecución de los mismos por lo que los mismos y la contratación de los profesionales solo podía ser acordada por un año, pudiendo no renovarse el respectivo proyecto por el Concejo Municipal.

5.- Que tal y como lo ha indicado la señora Ribí Gutiérrez y conforme se desprende del acta de notificación de no renovación de contrato de prestación de servicios a honorarios correspondiente al actor, el programa en el que el actor venía prestando sus servicios desde el año 2019 vio modificados sus lineamientos en aspectos técnicos y administrativos para el año 2023. Que de acuerdo a los dichos de la testigo antes indicada, la demandada decidió cambiar los lineamientos del programa de apoyo a personas con discapacidad con el objeto de responder a las necesidades reales de aquellas personas con necesidades especiales. Que de acuerdo a lo anterior, el enfoque del programa se modificó centrándose principalmente el mismo en la entrega de aportes y de apoyo médico a personas con discapacidad pero ya no referido al objetivo dispuesto por la Dirección respectiva. Que así las cosas, las labores del actor ya no fueron requeridas por lo que con fecha 01 de diciembre de 2022 se le informó al demandante que sus servicios no serían requeridos para el año 2023 dados los nuevos lineamientos planteados por la autoridad administrativa, los que resultaban diversos a las obligaciones del actor. Por lo anterior, los servicios del actor solo fueron requeridos hasta el 31 de diciembre de 2022.

SEPTIMO: Que el artículo 7 del Código del Trabajo define el “Contrato de Trabajo”, como una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada.



OCTAVO: Que doctrinariamente, se ha considerado que la subordinación y dependencia es un elemento esencial o tipificante de un contrato de trabajo, que implica la vinculación de dos sujetos desde posiciones diversas. En efecto, por un lado se tiene a un sujeto que busca una prestación de servicios para lo cual ejerce un poder de mando que se manifiesta en su poder de dirección y de disciplina y por otro lado, un sujeto que debe cumplir las instrucciones u órdenes que el primero le imparta para la ejecución de las labores encomendadas, dentro de los márgenes y límites que el propio legislador ha impuesto y por el cual percibe una remuneración.

NOVENO: Que, a su turno, el artículo 1° de la Ley N° 18.883, dispone que el estatuto administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las municipalidades y, en el caso de los funcionarios a contrata estarán afectos a dicha ley en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de dichos cargos.

Por su parte, el artículo 3° dispone que quedarán sujetos a las normas del Código del Trabajo, las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades, en las hipótesis dispuestas por el legislador.

DECIMO: Ahora bien, el artículo 4 de la ley N° 18.883, dispone y faculta a las municipalidades la contratación sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, mediante decreto del alcalde. Por su parte, el inciso segundo de la norma en comento, autoriza la contratación a honorarios para la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. En ambas situaciones, dichas personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato, no siéndoles aplicables las normas del referido estatuto de funcionarios municipales.

UNDECIMO: Que el artículo 1° del Código del Trabajo, previene que sus normas "no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en



que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial". Que por su parte, el artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, prohíbe a los Municipios contratar personal sujeto al Código del Trabajo fuera de los casos específicamente señalados por la ley, como ocurre en las situaciones contempladas en el artículo 3° del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales contenido en la citada Ley N° 18.883; de los empleados de los servicios traspasados a las Municipalidades de acuerdo con el Decreto Ley N° 3.063, de 1978, y de los médicos cirujanos que se desempeñan en los gabinetes psicotécnicos municipales.

DUODECIMO: Que por su parte y teniendo presente lo referido en las normas precedentes indicadas y lo razonado en los motivos **SEXTO** y siguientes de esta sentencia, ha de tenerse por establecido que los servicios del actor fueron requeridos y por ende se le contrató para desarrollar sus servicios para cometidos transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de la Municipalidad y que decían relación con programas anuales que se encontraba claramente acotado en el tiempo y conforme al cual la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda ejecutaba un programa municipal previamente autorizado por el Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, órgano que autorizaba el mismo y su consecuente financiamiento con cargo al presupuesto municipal, específicamente a las partidas referidas a prestaciones de servicios comunitarios. Que de acuerdo a lo que se ha podido establecer en el motivo SEXTO de esta sentencia, el programa en cuestión para el año 2023 cambió de objetivo no siendo aquel acorde con la prestación de los servicios del actor, por lo que terminado el proyecto, ya no fue necesario continuar con el contrato a honorarios acordado anualmente con el demandante. Que lo anterior, permite concluir que las labores ejecutadas por el actor no eran ni propias ni habituales en el municipio pues las mismas estaban vinculadas a programas esporádicos en el tiempo y que no decían relación con tareas propias del municipio. Que en este sentido ha de indicarse que para efectos de ejecutar el respectivo programa, la demandada



requirió los servicios del actor quien debía cumplir su cometido en el plazo de duración que cada contrato de prestación de servicios indicaba, percibiendo por dicho convenio sumas de dinero provenientes del presupuesto municipal asignado a prestaciones de servicios comunitarios.

Que dicha circunstancia y atendido lo referido precedentemente, impide que a su respecto pueda dársele aplicación a la norma contenida en el inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, según la cual, "los trabajadores" de las entidades señaladas en el inciso precedente -entre ellas las que integran la Administración del Estado- se sujetará a las normas de dicho Código en las materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos. En efecto, el demandante, según se ha razonado precedentemente y conforme se desprende de los antecedentes aportados por ambas partes y teniendo en especial consideración los decretos de nombramiento ya mencionados, actos administrativos cuya nulidad no se ha pedido en este proceso, ha de tenerse por establecido que aquel ha sido contratado por la municipalidad en cuestión en uso de las facultades que por ley le otorga la ley orgánica de municipales, Ley N° 18.883, disposición que excluyen la condición de funcionario afecto al estatuto municipal y laboral, sometiéndose en definitiva y en forma exclusiva a las normas contenidas en el respectivo contrato de prestación de servicios a honorarios.

DECIMO TERCERO: Que así las cosas, ha de señalarse que la situación fáctica planteada por el actor no pudo encuadrarse en una relación jurídica en los términos dispuestos en el artículo 7° del Código del Trabajo, ni hacer efectivos a su respecto derechos o beneficios contemplados por este cuerpo legal, atendido lo ya razonado precedentemente.

Que aun cuando los servicios ejecutados por aquel se hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario y sujetos a la dependencia e instrucciones de jefaturas, ello en todo caso no hace aplicable a su respecto la citada regla del artículo 7 del Código del Trabajo pues dichas condiciones pueden perfectamente pactarse o aplicarse en un contrato remunerado a honorarios, situación que es más asimilable al arrendamiento de



servicios regidos por el derecho común antes que al contrato de trabajo propio del estatuto laboral.

DECIMO CUARTO: Que sin perjuicio de lo ya razonado de manera precedente y a mayor abundamiento, ha de indicarse que establecida la decisión de contratar, el organismo público debe materializar dicha decisión a través de un acto administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, actuación que debe reunir las exigencias planteadas por el legislador para su validez; de no cumplirse los mismos, aquellos no podrían surtir los efectos pretendidos por las partes que concurren a su generación. En el entendido anterior, el actor fue contratada para prestar servicios a honorarios; que como tal dicha decisión quedó plasmada en un acto administrativo cuya validez no ha sido reclamada en este proceso y conforme al cual el demandante prestó sus servicios a partir del mes de marzo de 2019, rigiéndose dicha vinculación conforme a las reglas contenidas en el mismo contrato, por expresa disposición del inciso final del artículo 4º de la Ley 18.883, no siendo aplicable el Código del Trabajo.

Que ha de indicarse que el artículo 8 de la Ley N°19.880 dispone que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad siendo válidos en la medida que no se declare lo contrario por un juez o por la propia administración. En el caso en cuestión el ente público ha sostenido la validez de los mismos, servicios que fueron contratados para un cometido específico por un técnico en la materia y solo por los periodos contenidos en los respectivos contratos a honorarios, no siendo efectivo establecer que las labores que debieron ser ejecutadas por aquel hayan excedido las descripciones contenidas en sus contratos de prestación de servicios. En vista de lo anterior, ha de tenerse por establecido que los derechos que adquirió el demandante con ocasión de la prestación de sus servicios son sólo aquellos contemplados en sus respectivos contratos de prestación de servicios a honorarios.

En síntesis, revisados los contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos entre las partes del presente litigio, no aparece que el demandante haya tenido derecho al pago de cotizaciones de seguridad social o el pago de



indemnizaciones por términos de los servicios, pagos que en todo caso están expresamente reglamentados para todos los que prestan servicios en el sector público en los casos expresamente establecidos por el legislador. Que en consecuencia, y teniendo en vista las prestaciones reclamadas por el demandante ha de indicarse que las mismas no se encuentran regladas ni menos reconocidas en los contratos que las partes suscribieron en su oportunidad, sino que los mismos aparecen reglados en el Código del Trabajo, disposición que no rige la relación contractual habida entre los litigantes de este juicio.

DECIMO QUINTO: Por otra parte, ha de indicarse que si lo pretendido por el actor fue restar valor a los actos administrativos que dieron inicio a su vinculación con la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, aquello no ha sido expresamente pedido por aquel ni lo mismo ha sido declarado por la administración en los términos establecidos por el artículo 53 de la Ley N°19.880. Que así las cosas, el acto administrativo es plenamente válido, no existiendo ni competencia ni facultades de este tribunal para establecer lo contrario, debiendo en consecuencia desestimarse la demanda en todas sus partes en la forma que se indicará en lo resolutivo de esta sentencia.

DECIMO SEXTO: Que el resto de las probanzas incorporadas por las partes, las que han sido analizadas de conformidad a las reglas de la sana crítica, no contienen información que contradiga aquellos hechos asentados en esta sentencia y sobre los cuales se ha razonado jurídicamente conforme a las normas involucradas en el presente caso, deviniendo los mismos en sobreabundantes en relación a hechos que se han tenido como suficientemente establecidos en este proceso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 a 11, 21, 22, 35, 174, 201, 420, 423, 425 a 432, 456 y siguientes del Código del Trabajo, Ley 18.883 y demás normas pertinente; **se resuelve:**

I.- Que **SE RECHAZA** en todas sus partes, la demanda interpuesta por don **PEDRO CARCEY MENA** en contra de **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA** ambas partes ya individualizadas en este juicio.



II.- Que no se condena en costas al actor por haber tenido motivo plausible para litigar.

Devuélvase a las partes las pruebas documentales aportadas, ejecutoriada que sea la presente sentencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

R.U.C. N° 23-4-0466419-0

RIT N° O- 227-2023

**PRONUNCIADA POR DOÑA MARCELA POBLETE VALDES, JUEZ
TITULAR EN ESTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN MIGUEL**



A contar del 03 de septiembre de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>